



ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN  
DE XUSTIZA

## XDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 A CORUÑA

**SENTENCIA: 00152/2018**

Modelo: N11600  
C/ CAPITAN JUAN VARELA S/N 3ª PLANTA. A CORUÑA.

N.I.G: 15030 45 3 2017 0001023

**PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000266 /2017-M**

**Sobre:** OTROS

**De:** MARIÑA REY MARTINEZ

**Abogado:** MARIA ROCIO ARNOSO MOURE

**Procuradora:** SUSANA CABANAS PRADA

**Contra** SERVICIO TERRITORIAL DE INSPECCION EDUCATIVA DE A CORUÑA, JEFATURA TERRITORIAL DE A CORUÑA

LETRADO DE LA COMUNIDAD

Don Enrique García Llovet, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de A Coruña, ha pronunciado en el día de hoy

**EN NOMBRE DEL REY**

La siguiente

### SENTENCIA

En A CORUÑA, a veintiocho de diciembre del dos mil dieciocho.

Vistos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de los de A Coruña, los presentes autos de Recurso Contencioso-Administrativo N° 266/17-M, tramitado por las normas del **procedimiento abreviado**, en materia de **OTROS**, promovidos a instancia de **xx**), representada por la Procuradora **xx** y defendida por la Abogada **xx** contra **Servicio Territorial de Inspección Educativa, Jefatura Territorial de Educación de A Coruña**, representado y defendido por el Letrado de la Xunta.

### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** Por la parte demandante se presentó escrito de demanda de recurso contencioso-administrativo frente a inactividad de la Administración de reclamación presentada ante el servicio Territorial de Inspección Educativa de A Coruña en data de 6 de julio de 2017; constituyendo el suplico de la demanda el que por este órgano jurisdiccional se dicte sentencia por la que con estimación de la misma se revoque la resolución recurrida y se reconozca el derecho de **xxx** a la concesión del título de Graduada en Educación Secundaria y todo ello con expresa condena en costas a la Administración demandada.





ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN  
DE XUSTIZA

**SEGUNDO.-** Por Decreto de fecha tres de enero del dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda, acordándose reclamar el expediente administrativo, que ha sido remitido, y, señalándose para la celebración de vista el pasado día diez de octubre del dos mil dieciocho en que se celebró con la asistencia de las partes y con el resultado que se recoge en el documento electrónica CD unido a los autos.

**TERCERO.-** La cuantía del recurso objeto de enjuiciamiento es de indeterminada.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Se impugna en el presente recurso inactividad de la Administración de reclamación presentada ante el servicio Territorial de Inspección Educativa de A Coruña en data de 6 de julio de 2017; constituyendo el suplico de la demanda el que por este órgano jurisdiccional se dicte sentencia por la que con estimación de la misma se revoque la resolución recurrida y se reconozca el derecho de la xx a la concesión del título de Graduada en Educación Secundaria y todo ello con expresa condena en costas a la Administración demandada.

**SEGUNDO.-** Los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda se contraen a los siguientes extremos:

La demanda refiere que xxx se encontraba escolarizada en el IES xxx en el cual llevó a cabo todos sus estudios de ESO la alumna ha recibido atención especializada y ACI y refuerzo en todas las materias de ESO desde el primer curso hasta el último y el último curso, 2016/2017 fue superado positivamente en todas las materias y en fecha de 23 de junio de 2017 se entrega por parte del Centro informe de evaluación final del último curso de la ESO en el que se informa que al alumna ha superado todas las asignaturas correspondiente a 4º curso pero que no titula por no haber obtenido el grado de adquisición suficiente de competencias clave, se presenta reclamación ante la Dirección del IES siendo rechazada dicha reclamación por resolución de 4 de julio de 2017 y en data de 6 de julio de 2017 se interpone recurso frente a la Jefatura Territorial de Educación Servicio Territorial de Inspección Educativa siendo desestimada la misma por silencio frente al que se alza la actora en esta sede jurisdiccional con expresa invocación del artículo 14 de la CE, artículos 22.7, 31, 74.1 de la Ley Orgánica 2/2006, RD 56272017 y Real Decreto-Ley 5/2016, artículos 6.2, 7.2, 8, 10, 23 y concordantes del RD 1105/2014 y artículos 7.2, 8 y 24 del Decreto 86/2015 y Orden ECD/1361/2015.

**TERCERO.-** Este Juzgado ya se ha pronunciado en un escenario que guardaba ciertas similitudes con el que ahora nos ocupa y si bien se ha producido una mutación normativa que luego ha de examinarse debemos recordar sin embargo el sistema de principios de valor constitucional que hemos tomado en





ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN  
DE XUSTIZA

consideración en anteriores ocasiones y así en Sentencia en PA 313/2012 decíamos "parece obligado para la correcta resolución del presente litigio que los principios de igualdad y no discriminación son los elementos basilares de nuestro sistema constitucional y por ende del funcionamiento de los poderes públicos y aun de la entera convivencia entre ciudadanos libres e iguales, igualdad que no sólo se predica en nuestra norma suprema desde una aproximación formal sino también material o sustantiva y que integra desde esta aproximación la promoción e políticas llamadas a superar las desigualdades políticas transversales que se proyectan sobre los distintos subordenamientos y políticas sectoriales y aun con mayor intensidad allí donde como es el caso que nos ocupa nos encontramos en presencia de derechos fundamentales pues si la igualdad es principio ordenador de la convivencia como ya hemos dicho la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales es condición primera del funcionamiento de una sociedad democrática. Pues bien, conviene recordar igualmente que en el concreto ordenamiento sectorial que nos ocupa el derecho a la educación consagrado constitucionalmente en el artículo 27 de nuestra norma suprema y norma basilar de dicho subordenamiento integra el derecho a una educación inclusiva, Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 5 de marzo de 2012, de modo y manera que todos los ciudadanos sin discriminación por razón alguna, incluidas situaciones de discapacidad que no son sino una concreción de la diversidad, quede excluido del citado derecho como instrumento para su realización como personas. Para ello y para garantizar que esa diversidad y diferencia no se traduce en una discriminación el sistema educativo como dispone el artículo 74 de la LO 2/2006 dispone " La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario" y el ordenamiento contempla en aquellos supuestos en los que es necesario la implementación de instrumentos que tengan en cuenta las necesidades educativas especiales de nazcan de esa diversidad y así el artículo 71.3 de la LO 2/2006 dispone " Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado anterior. La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión" y como concreción de ese principio y mandato dispone en su artículo 72.3 aquel cuerpo legal "3. Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines establecidos" ese y no otro es el telos que se persigue con la adaptación curricular





ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN  
DE XUSTIZA

facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines establecidos y que impone conforme contempla el artículo 27 de la tan meritada Ley Orgánica "1. En la definición de las enseñanzas mínimas de la etapa se incluirán las condiciones básicas para establecer las diversificaciones del currículo desde tercer curso de educación secundaria obligatoria, para el alumnado que lo requiera tras la oportuna evaluación. En este supuesto, los objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodología específica a través de una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con carácter general." Por ello debemos de notar que la adaptación curricular opera proporcionando para aquel alumno con necesidades educativas especiales el patrón, regla o estándar de cumplimiento de objetivos pues no se contempla como una operación de reducción de contenidos o de niveles de exigencia, como se sostiene en el acto del juicio por el Letrado de la Administración, sino que lejos de ello el mandato legal impone una adaptación de los mismos a las capacidades diversas del alumnado y por ello mismo se contempla específicamente la evaluación en función de esas adaptaciones curriculares, de operar una mera reducción de contenidos con una visión pretendidamente paternalista que no se compadece con las normas basilares de nuestro ordenamiento educativo no se entendería tal evaluación debiendo de notar que la misma como para todos los alumnos es un auténtico derecho y que ha de conformarse a las prescripciones legales y en primer lugar a dichas adaptaciones curriculares como expresamente dispone el artículo 28.9 de la LO 2/2006 " Los alumnos que cursen los programas de diversificación curricular a los que se refiere el artículo 27, serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas" y así lo ha entendido nuestra doctrina así Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 26 de noviembre de 2012 en donde se dice "Sin embargo, la Sala no puede estar de acuerdo, en igual sentido al expuesto por el Juez a quo en la sentencia que ahora es objeto de apelación, con las anteriores argumentaciones, dado que si se trata de un menor con necesidades educativas especiales dada su minusvalía, para el cual se ha establecido un específico, concreto y propio programa curricular, adaptado individualmente al mismo, dadas aquellas circunstancias; no puede fundamentarse la denegación del título de segundo ciclo de ESO en que no ha superado el general proyecto curricular del centro, porque éste ya no le es aplicable, sino que le es exigible tan sólo superar el proyecto curricular individualizado para el mismo. De otra forma, se actuaría de una forma perversa, porque se fijarían unas exigencias concretas e individualizadas al alumno con necesidades educativas especiales, que no serían las exigibles, sino que se exigirían las generales exigidas a todos los demás alumnos sin ninguna necesidad especial, dejando carente de sentido la propia adaptación curricular individualizada." Pero es que además de atender a tales principios esa es la literalidad de las normas territoriales que contemplan dichas evaluaciones y







ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN  
DE XUSTIZA

como presupuesto de las mismas la no discriminación ni en la evaluación ni en la titulación en razón de la diversidad y así dispone el artículo 13 del Decreto 133/2007 "1. La educación secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y de los objetivos de la educación secundaria obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente." y por lo que hace a la concreta evaluación dispone el artículo 14 de mismo cuerpo legal "3. En la educación secundaria obligatoria podrán realizarse adaptaciones curriculares que se alejen significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, dirigidas a este alumnado con necesidades educativas especiales. 4. Estas adaptaciones curriculares, que estarán precedidas en todo caso de una evaluación de las necesidades educativas especiales del alumnado y la consiguiente propuesta curricular específica, se realizarán buscando el máximo desarrollo de las competencias básicas de acuerdo con las posibilidades de la alumna o alumno; la evaluación y la promoción tomarán como referencia los objetivos y criterios de evaluación fijados en las adaptaciones." disponiendo por último el artículo 17 del ya meritado Decreto que "3. El alumnado que curse programas de diversificación curricular obtendrá el título de graduado en educación secundaria obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que integran el programa. Además, podrá obtener dicho título el alumnado que, superados los dos ámbitos, tenga evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en tres, siempre que a juicio del equipo docente hubiese alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa." y la norma precitada distingue así dos supuestos aquel primero por el que se superan, con los criterios que no son otros que la adaptación curricular por lo ya dicho, todas las materias, como es el caso que nos ocupa pues el alumno aprobó todas las materias entre las convocatorias de junio y septiembre, en cuyo caso se titula siempre sin espacio o margen alguno para un juicio discrecional por parte de la Administración o el Centro siendo un auténtico y real derecho que en el caso presente se conculca palmariamente, y aquellos otros en los que el alumno tenga evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en tres, siempre que a juicio del equipo docente hubiese alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa, pero no es este el caso pues el alumno aprobó todas las asignaturas."

Pero no podemos olvidar que en dicha Sentencia no se tomaba en consideración el marco de normas internacionales que obligan al Estado español respecto la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, su plena igualdad y su concreta protección positiva en el ámbito de la educación y en concreto del artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad estándar de cumplimiento de mínimos





ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN  
DE XUSTIZA

de la protección que se reclama debiendo recordar ahora reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017 (rec. 2965/2016) en la que por extenso y con referida a la precitada Convención se dice "TERCERO.- Respecto de personas con disfunciones o minusvalías, el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a la educación ( artículo 27 en relación con el artículo 14) se desarrolla en los artículos 73 a (LA LEY 4260/2006 ) 75 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LA LEY 4260/2006) (en adelante LOE). Tal normativa debe aplicarse conforme al mandato constitucional de procurar que la igualdad sea efectiva, de remover los obstáculos que lo impidan o dificulten y de procurar la integración social y laboral de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos ( artículos 9.2 (LA LEY 2500/1978 ) y 49 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) ). Además esta normativa interna debe interpretarse conforme a los tratados internacionales ( artículo 10.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) ) en concreto el artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006 (LA LEY 14088/2006), ratificada por España mediante instrumento de ratificación publicado en el BOE el 21 de abril de 2008. CUARTO.- De ese conjunto normativo ..., cabe deducir el siguiente régimen: 1º Para garantizar la igualdad efectiva y la no discriminación en el ejercicio del derecho a la educación de los alumnos con una discapacidad o trastorno grave de conducta, rigen los principios de normalización e inclusión, tanto para el acceso como en la permanencia en el sistema educativo. 2º La regla general es que se procure su integración en centros ordinarios con "medidas de atención a la diversidad" que pueden flexibilizarse en las distintas etapas educativas si es necesario. Y la excepción a esa regla general - que supone un trato diferente justificado -, consistirá en la escolarización en unidades o centros de educación especial sólo cuando las necesidades de esos alumnos « no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios ». 3º Para la consecución de esa regla general, tal normativa ordena a las administraciones una puesta de medios para que procuren apoyos y atenciones educativas específicas, personalizadas y efectivas para estos alumnos con necesidades educativas especiales. De esta manera las administraciones deben prestarles apoyo necesario dentro del sistema general de educación que facilite su formación efectiva, hacerles ajustes razonables en función de sus necesidades individuales, que se les cree un entorno que fomente al máximo el desarrollo académico y social, para lograr el objetivo de la plena inclusión. 4º Por otra parte las modificaciones y adaptaciones que se prevén para estos alumnos para procurar su integración en centros ordinarios, deben ser las necesarias y adecuadas, no pueden suponer una carga desproporcionada o indebida. 5º Esas necesidades educativas deben identificarse y valorarse lo más tempranamente posible, por personal cualificado y en los términos que determinen las administraciones educativas. A estos efectos la evaluación consistirá en valoraciones al





ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN  
DE XUSTIZA

inicio y al final del curso, valorándose en éstas la consecución de los objetivos propuestos en la valoración inicial. 6º La consecuencia de la evaluación es que permita la orientación adecuada, modificar el plan de actuación, la modalidad de escolarización y favorecer "siempre que sea posible" una mayor integración que es, como se ha dicho, el principio general. 7º De esta manera el legislador ordena a las administraciones educativas respecto de este tipo de alumnado, que en Educación Infantil se promueva su escolarización; en los niveles obligatorios que se desarrollen programas para su adecuada escolarización y en los postobligatorios que se favorezca su escolarización y se adapten las condiciones de realización de las pruebas" y aun la sanción constitucional de dicho orden de principios que acoge la STC 10/2014 donde se dice "debemos tener presente el marco normativo específico sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, constituido por el art. 27 CE, **que reconoce el derecho de todos a la educación, el art. 14 CE que prohíbe "discriminación alguna" por "cualquier circunstancia o condición personal"** y el art. 49 CE que, sin reconocer derechos fundamentales, sí ordena a los poderes públicos realizar una política de integración de los discapacitados. Estos preceptos, como este Tribunal ha venido afirmando desde la temprana STC 38/1981, de 23 de noviembre, FJ 4, han de ser interpretados, en virtud del art. 10.2 CE, a la luz de lo dispuesto en los tratados internacionales que España haya celebrado sobre la materia. En este sentido, cobra especial relevancia la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, ratificada por el Estado español mediante instrumento de ratificación publicado en el "BOE" el 21 de abril de 2008, que parte como principio de "la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso" [preámbulo, letra j)]. Respecto del derecho a la educación, su art. 24.1 les reconoce expresamente el mismo a las personas discapacitadas, indicando que para "hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes aseguraran un sistema de educación inclusivo a todos los niveles", debiendo garantizar dichas partes, según el art. 24.2, entre otras medidas, que "las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación", "se hagan los ajustes razonables en función de las necesidades individuales", "se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva", "se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión" [letras a), c), d) y e), respectivamente]. En el art. 2 de la Convención se prohíben todas las formas de discriminación de estas personas, entre ellas "la denegación de ajustes razonables", entendiendo por éstos "las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se





ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN  
DE XUSTIZA

requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales". En nuestro ordenamiento la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, también prevé en su art. 74.1 que "la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo", de forma que la escolarización de estas personas en unidades o centros de educación especial "sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios". Dicha norma dispone, por otra parte, que la valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará "por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones educativas", correspondiendo a éstas últimas "promover la escolarización en la educación infantil del alumnado que presente necesidades educativas especiales" (art. 74.2 y 4)."

Por último hemos de rechazar la tesis de que ya se ha dado satisfacción a aquel mandato constitucional y a aquel marco internacional de derechos mínimos garantizados y que vincula al Estado español al haber ratificado aquella Convención, decimos que habría dado cumplimiento a ese estándar mínimo de igualdad "permitiendo" la permanencia en el sistema educativo de Doña xx pero que el acceso a una titulación como es el Grado de Educación Secundaria está reservado a unos conocimientos que no ha acreditado la actora, ese modo de razonar parece asumir una perspectiva meritocrática en el acceso a los servicios públicos básicos, lo es desde luego la educación en sus etapas obligatorias, incompatible con los principios constitucionales antes referido, muy señaladamente con la dignidad de la persona como primer principio del que emana no sólo nuestro sistema de derechos y libertades sino el entero orden constitucional, esa igual dignidad en la diversidad es la clave de la bóveda de nuestro sistema de convivencia y su institucionalización, transformando a la persona en ciudadano mediante el reconocimiento de la pertenencia a la comunidad política justamente en el ejercicio de los derechos y libertades y entre ellos la educación y el acceso a la misma, el proceso que define nuestro sistema democrático; así el acceso a los servicios públicos educativos no es un mero derecho de contenido prestacional sino que como todos los derechos

fundamentales reconocimiento de nuestra condición de ciudadanos debiendo someterse toda actividad de la Administración en ese subordenamiento al control estricto de igualdad como concreción del principio de igual dignidad.

Parece obligado notar ahora que es cierto como ya se ha recordado supra que desde aquella sentencia de este Juzgado que enunciaba algunos de los principios referidos se ha producido una mutación en el subordenamiento sectorial que nos ocupa que ha de examinarse obligadamente, con la advertencia







ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN  
DE XUSTIZA

sin embargo de que el sistema de principios y reglas constitucionales no ha sido objeto de mutación alguna lo que impone el examen de esa mutación en el plano infraconstitucional desde el sistema de principios y reglas que acabamos de recoger, y ello es así de forma muy señalada en lo que toca al artículo 2 del RD 562/2017 por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller y allí se dice "1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial. b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias

distintas. c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes" así la previsión contenida en la letra c) que acabamos de transcribir parece amparar una evaluación distinta y separada de conocimientos y objetivos y competencias pudiendo superarse los primeros y no haberse adquirido las segundas no pudiendo por ello titular, ese viene a ser el razonamiento nuclear de la Administración demandada que hemos de examinar debiendo para ello desplegar ese examen en un doble plano de naturaleza bien distinta de un lado parece obligado indagar el amparo legal de tal previsión que es llano no puede contenerse en una disposición de rango reglamentario y de otro y atendiendo al obligado control desde la igualdad examinar si dicha previsión es contraria al principio de igualdad incluso a la proyección de ese principio como prohibición discriminación indirecta.

Por lo que hace al primer nivel de examen, el amparo del artículo 2 del RD 562/2017 en norma con rango de ley que contemple tal evaluación de competencias como separada y distinta de la evaluación de conocimientos, hemos de notar que en efecto la LO 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa en su apartado dieciséis del artículo único de modificación de la LOE da nueva redacción al artículo 25 de aquella Ley Orgánica y pasa a decir en su apartado 10 respecto de la etapa final de la ESO "10. El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes tanto por la opción de enseñanzas académicas como por la de enseñanzas aplicadas." Y

el apartado 20 modifica el artículo 29 de aquella Ley Orgánica que pasa a decir "1. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes





ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN  
DE XUSTIZA

materias: a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, salvo Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno o alumna será evaluado si las escoge entre las materias de opción, según se indica en el párrafo siguiente. b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cuarto curso. c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos" por ello la evaluación de competencias que contempla como separada y distinta de la evaluación de conocimientos de la normativa reglamentaria invocada por la Administración cuenta con la obligada y suficiente habilitación legal, pero claro está siempre que esa evaluación cumpla los requisitos mínimos que con carácter general se contemplan criterios objetivos y pruebas de la misma naturaleza y debidamente documentadas que tendrán que ser separadas y distintas de la evaluación de conocimientos, por último no puede dejarse de notar que en esa evaluación de competencias también habrá de tomarse en consideración la adaptación curricular aunque otra tesis sea la sostenida por la Administración en este extremo.

Pero hemos de detenernos ahora el examen en el segundo de los planos referidos supra y este no es otro que el test de discriminación indirecta al que debemos someter tanto el bloque normativo que nos ocupa como la resolución combatida en tanto que concreción de aquel, todo ello claro está de acogerse la tesis de la Administración de la improcedencia de aplicar en la evaluación de competencias la adaptación curricular, y para ello debemos comenzar por recordar que la discriminación indirecta se nos aparece cuando una norma o una práctica administrativa formalmente neutral no lo es en su aplicación provocando un resultado lesivo, notablemente con lesión de derechos y libertades quebrando así el principio de igual libertad, decimos un resultado lesivo a un grupo o colectivo caracterizado o singularizado y eso es lo que aparece en el caso que nos ocupa para ello basta con examinar la documental aportada por la Administración demandada a requerimiento de este Juzgado sobre el número de alumnos que habiendo superado todas las asignaturas del último año de la ESO, evaluación de conocimientos, se les otorgó el título de graduado en ESO, así tomando como referencia el curso 2016/2017 alumnos de 4º de la ESO con adaptación curricular que superaron todas las materias y obtuvieron título de ESO 13, alumnos con adaptación curricular que superaron todas las materias y no obtuvieron título de ESO 21, alumnos sin adaptación curricular que superaron todas las materias y obtuvieron título de ESO 11495, alumnos sin adaptación curricular que superaron todas las materias y no obtuvieron título de ESO 0, parece llano que las posibilidades estadísticas de que entre 11495 alumnos que superaron todas las materias, conocimientos, todos fueren evaluados positivamente en la adquisición de competencias y objetivos de forma separada y distinta de la evaluación de materias, conocimientos, es inexistente siendo la única conclusión posible que a los alumnos sin ACI no se les ha evaluado de





ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN  
DE XUSTIZA

forma distinta y separada la adquisición suficiente de competencias clave sino que se ha entendido que la evaluación de conocimientos, materias era acreditación suficiente de aquella evaluación de competencias y objetivos peros resulta igualmente concluyente que no se ha procedido así respecto de los alumnos con ACI pues respecto de estos últimos si se ha procedido se nos dice a una evaluación separada lo que explicaría ese porcentaje elevado, desde luego superior a 0 que ofrecen los alumnos sin ACI, de alumnos con ACI y que pese a superar todas las materias no titulan, la práctica pues aparecería como manifiestamente discriminatoria bajo la forma de una discriminación indirecta a la que antes se hacía referencia: se habilita una evaluación nueva pero sólo se somete a ella a un determinado colectivo, pese a que la norma formalmente no contempla tal diferenciación muy probablemente desde la conciencia del legislador de que tal previsión diferenciadora sería palmariamente contraria a las prescripciones de la normativa citada supra por extenso señaladamente de un lado e artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de otro el artículo 14 de nuestra norma suprema, todo ello sería título ya para la revocación de las resoluciones combatidas y el reconocimiento del derecho de la actora a titular.

Pero es que en el caso que nos ocupa, ignoramos si es así en los restantes alumnos con ACI, sorprendentemente no consta ningún documento que formalice dicha evaluación, no nos referimos claro está a los informe de evaluación sino a las concretas pruebas, cuestionarios, etc... distintos de las evaluaciones de conocimientos, materias, la Administración en el acto del juicio no ha podido identificar ningún documento, cuestionario, prueba, que acredite documentalmente dicha evaluación separada de las competencias respecto de la evaluación de los conocimientos, insistimos que no nos referimos a los resultados de dicha evaluación sino a los cuestionarios o pruebas sobre los que se tendría que fundar dicha evaluación, de acudir a los examen o pruebas sobre conocimientos materias como parece pretender la demandada a dichas pruebas es obligado conforme la normativa vigente la consideración en dicho proceso de evaluación la ACI, puede fácilmente comprenderse que en este escenario falta incluso el presupuesto fáctico de una práctica que además entendemos por lo dicho supra discriminatoria pues sólo se dirige a los alumnos con ACI.

Por todo lo cual procede la íntegra estimación del recurso accionado revocando las resoluciones combatidas y el derecho de la alumna xxxx a la concesión del título de Graduada en Educación Secundaria.

**CUARTO.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA en su redacción por Ley 37/2011 procede en razón de la íntegra estimación de las pretensiones accionadas la expresa condena en costas a la demandada, si bien se limitan las mismas por los conceptos de representación y defensa a un máximo de 400 euros.



**QUINTO.-** Vista la cuantía del procedimiento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la LJCA no cabe apelación frente a la presente resolución.

### FALLO

**ESTIMANDO** recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora xxx en representación de xxxx frente a inactividad de la Administración de reclamación presentada ante el servicio Territorial de Inspección Educativa de A Coruña en data de 6 de julio de 2017 revocando las resoluciones combatidas y el derecho de la xxx a la concesión del título de Graduada en Educación Secundaria, con expresa condena en costas a la demandada si bien se limitan las mismas por los conceptos de representación y defensa a un máximo de 400 euros.

Pronúciase esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno, sin perjuicio del recurso de casación que pueda interponerse si se dan los requisitos previstos en el artículo 86.1 de la LJCA.

Una vez notificada y en el momento procesal oportuno, remítase testimonio de la misma a la Administración demandada, con devolución del expediente administrativo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará por testimonio a los autos de su razón definitivamente juzgando lo pronuncio, mando y xxx Magistrado Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de los de A Coruña.

